GRISUR

Grupo de Información
y Solidaridad Uruguayo

Case postale 92

1211 Genève 4

SUISSE

Compte No 12-14847

No 58

4 de noviembre de 1976

INFORMACIONES

1. SECUESTRADOS EN BUENOS AIRES APARECEN PRESOS EN EL URUGUAY.

Un cable de la agencia Associated Press fechado en Montevideo informa que el 28 de octubre las Fuerzas Conjuntas emitie ron un extenso comunicado relativo a la detención de 62 uruguayos imputados de realizar actividades contra la dictadura. Según la fuente citada, entre ellos encuentran Ana Inés Quadros de Strauch, María Mónica Soliño Platero, Sara Méndez Lomporio, Asilú Maceiro, Víctor Lubián y Elena de Andrés. Todos ellos habían sido secuestrados en Buenos Aires, en muchos casos ante numerosos testigos, en el mes de julio y desde entonces no se tenía ninguna noticia sobre su paradero. El comunicado de las Fuerzas Conjuntas --añade AP-- afirma que estas personas fueron detenidas en momentos de ingresar clandestinamente al Uruguay y desmiente las denuncias formuladas en el exterior en el sentido de que su desaparición se había producido en la capital argentina.

No es la primera vez que la represión uruguaya, que actúa impunemente en ambos márgenes del Plata, traslada a Montevideo a refugiados residentes en Buenos Aires; hace pocos meses, aparecieron en las cárceles uruguayas Alejandro Nogueira Rodríguez y Adriana Ferrari de Nogueira, que habían sido detenidos en la capital argentina el 11 de diciembre. Tampoco llama la atención el hecho de que, en momentos en que hasta el Congreso norteamericano ha condenado energicamente la violación de los derechos humanos en el Uruguay, la dictadura aluda a supuestas calumnias con la pretensión de eludir la responsabilidad que le cabe por el traslado de refugiados políticos de un país a otro.

La publicación de este comunicado de las Fuerzas Conjuntas deja planteada una dramática interrogante: ¿cuál ha sido la suerte corrida por los uruguayos desaparecidos en Buenos Aires cuyos nombres no aparecen en el comunicado? ¿Qué ha pasado, en especial, con Gerardo Gatti y León Duarte, por cuya liberación miembros de la represión uruguaya intentaron obtener un rescate en efectivo?.

2. URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN BUENOS AIRES DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.

Trascendieron los nombres de alrededor de 30 uruguayos desaparecidos en Buenos Aires entre el 26 de setiembre y el 5 de octubre. Todos ellos tienen la condición de refugiados políticos y están registrados como tales en la Oficina del ACNUR. La lista --que puede ser incompleta-- incluye seis niños. Los nombres que han llegado a nuestro conocimiento son los siguientes:
Roger JULIEN CACERES (31 años); Victoria ANDREAJUSTE (31); Victoria JULIEN ANDREAJUSTE (1 año); ... JULIEN ANDREAJUSTE (4); Alberto Cecilio MECHOSO MENDEZ (39); Adalberto SOBA (25); Ana Cecilia TRIAS (24); Juan Pablo ERRANDONEA (20); Raúl TEJERA (24); Jorge ZAFFARONI (24); María Elena ISLAS de ZAFFARONI (24); Mariana ZAFFARONI ISLAS (1 año); Washington CRAM; Ruben PRIETO (25); María de los Angeles MICHELENA de PRIETO (24); Victoria PRIETO MICHELENA (1 año); Miguel Angel MORFNO MALUGANI (28); Rosario CARRETERO (25); Pablo RECAGNO (25); Alvaro NORES MONTEDONICO (26); Carlos Alfredo RODRIGUEZ MERCADER; Rafael LEZAMA GONZALEZ; Miguel, MORALES VON PIEVERLING (28); Josefina Modesta KLEIM LLADO de MORALES (28); Carlos GOESSENS; Sara LERENA; Javier PERALTA; ... HAUVEN (28); la esposa de este último y sus dos hijos.

me 59
se recib
fiza -
no -

3. LOS "ANTICUERPOS" DEL CONTRALMIRANTE GUZZETTI. El diario argentino "La Opinión" publicó las declaraciones formuladas a su corresponsal en Nueva York por el Ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Videla, Contralmirante César Augusto Guzzetti. El periodista preguntó: "Parece que la Argentina, por el hecho de enfrentar un factor subversivo, mueve a la comprensión de otros países; pero, debido a la sensación de tolerancia frente al terrorismo de derecha, despierta repulsión. ¿Cómo ve Ud. ese aspecto?"

La respuesta de Guzzetti no deja lugar a dudas. Dijo textualmente: "Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de signo izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social del país está contaminado con una enfermedad que corroe sus entrañas y forma anticuerpos. Esos anticuerpos no pueden ser considerados de la misma manera que se considera al microbio. A medida que el gobierno controle y destruya a la guerrilla, la acción del anticuerpo va a desaparecer. Yo estoy seguro de que en los próximos meses no habrá más acciones de la derecha, cosa que ya está ocurriendo. Se trata sólo de una reacción natural de un cuerpo enfermo."

El Canciller Guzzetti fue uno de los primeros en expresar su solidaridad a su colega uruguayo por la decisión del Congreso norteamericano ante la violación de los derechos humanos en el Uruguay. Pero no se trataba del primer encuentro de los Ministros de Relaciones Exteriores de ambas márgenes del Plata. El 7 de mayo se habían reunido en Buenos Aires. Pocos días antes, Zelmar Michelini advertía: "He podido saber que el Ministro Blanco pedirá a las autoridades argentinas que me echen del país; sepa Ud. que si aparezo en el Uruguay será porque me llevaron contra mi voluntad". Dos semanas después, el viernes 21 de mayo, aparecen, acribillados a balazos, los cadáveres de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Rosario Barredo. Una prueba de la eficacia de los "anticuerpos" que con tanto calor defiende el Contralmirante Guzzetti, sin duda. Desde entonces, y sólo en lo que se refiere a los uruguayos en la Argentina, esos mismos "anticuerpos" han secuestrado a alrededor de 90, asesinado a algunos de ellos, trasladado a otros al Uruguay y pedido fabulosos rescates por otros.

4. MENDEZ EXCUSADO. Las declaraciones de Aparicio Méndez al corresponsal de "La Mañana" en San José (ver "Informaciones", Nº 57), en las que aludía a presuntas situaciones de caos en países como Francia, los Estados Unidos, México, etc., dieron lugar a un desmentido del Poder Ejecutivo, a un pedido de excusas a nivel diplomático ante los países mencionados por el Presidente, a la clausura --por una edición-- de "La Mañana", que publicó la entrevista, y a una amonestación a "El Diario", que la reprodujo.

La Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) se apresuró a anunciar que "son absolutamente ajenas al Sr. Presidente de la República las declaraciones públicas que en el orden internacional se le atribuyen en dicho reportaje". Por su parte, el Ministerio del Interior dispuso la clausura de "La Mañana" por una edición y una enérgica observación a "El Diario".

¿Es posible que "La Mañana" --o su corresponsal-- hayan inventado declaraciones, de tanta trascendencia, que Méndez no haya formulado? Todo indica que no. En primer lugar, ¿qué interés tendría en hacerlo un diario como "La Mañana"? Por otra parte, debe tenerse en cuenta que durante la entrevista estaba presente el Obispo de San José y que éste, al ser interrogado por corresponsales extranjeros una vez producido el escándalo diplomático, se negó a ratificar o rectificar la versión publicada por "La Mañana". Finalmente, las propias sanciones a los dos diarios resultan desproporcionada y sospechosamente benignas.

Hay que pensar, entonces, que desmentido, excusas y sanciones se hayan debido, más bien, a una valoración posterior de los dichos de Méndez y de sus posibles repercusiones. O bien, a una maniobra en dos etapas, destinada a que los gobiernos involucrados supiesen lo que Méndez piensa, aunque prefiera no decirlo oficialmente.

5. NUEVO PROYECTO DE LEY DE "ESTADO PELIGROSO". El 21 de octubre, el Poder Ejecutivo remitió al Consejo de Estado su proyecto de ley de "estado peligroso". La iniciativa no es nueva: hace ya tres años se había elaborado un texto similar, y hace dos meses, al asumir la Presidencia, Aparicio Méndez había anunciado su propósito de convertir en ley el régimen que hoy se aplica a los detenidos por "medidas de seguridad". El nuevo texto, en cuyos fundamentos se reconoce expresamente la inspiración de Mc Carthy, es incluso más draconiano que el anterior y, aun en las condiciones del Uruguay de hoy, constituye un monstruoso atentado a las libertades individuales que todavía se toleran.

¿Cómo explicar su aparición en estos momentos? Sin duda, como un esfuerzo del régimen por disfrazar algunos de los aspectos que más irritan a la opinión pública internacional, cuyo repudio se hace sentir desde todas partes. Se pretende dar un barniz de "legalidad" a las prisiones arbitrarias, por tiempo indefinido, por vía de "medida de seguridad", aplicadas a ciudadanos que los propios jueces militares no han encontrado culpables de delito que han cumplido ya las severas penas de la justicia militar. Esta finalidad de mejorar la imagen queda clara, también, en lo que aparentemente puede parecer como una cierta garantía: la justicia civil --y no la militar, que la dictadura sabe que está universalmente reconocida como mera herramienta de represión-- será la encargada de entender en los casos de "estado peligroso".

Veamos sintéticamente de qué se trata. Nada menos que de la posibilidad de que una persona que no ha violado ninguna ley --o que si delinquir ha sido puesta en libertad-- sea declarada "en estado peligroso" e internada, hasta por seis años, en lo que públicamente se llama "establecimiento con régimen de trabajo" (campo de concentración, con trabajo forzado, en realidad). Todo ello, a partir de las hipótesis más vagas y generales, en las que puede incurrir todo aquel que no se identifique abiertamente con la dictadura. Para empezar, los que demuestren inclinación a cometer delitos "de lesa nación". ¿Cómo se prueba tal "inclinación"? Muy simple: por "la adhesión a una ideología de violencia". Conociendo los criterios del régimen, bastaría con ser marxista --y qué vasta concepción del marxismo tiene la dictadura uruguaya!-- para caer en el sistema de la ley proyectada.

Otras hipótesis son igualmente graves: alcanza con tratar asiduamente a personas que hayan cometido delitos políticos, o frecuentar los lugares en que se hayan reunido habitualmente (¿amistad con detenidos? ¿concurrencia a sindicatos, clubes políticos, cafés?; en principio, aquí cabe todo): la tenencia de "objetos" que habitualmente se emplean quienes incurrir en delitos políticos (¿libros marxistas? ¿prensa de izquierda? ¿discos con canciones de protesta?); dificultar la acción preventiva o represiva de las fuerzas militares o policiales (¿será tal vez el caso de los abogados defensores de presos políticos?); por último, el haber realizado actos que tiendan a perjudicar, en el país o en el exterior, la imagen del gobierno uruguayo y la confianza en los objetivos que persigue (por ejemplo, quienes formulen denuncias de los crímenes y arbitrariedades de la dictadura, aunque sea ante organizaciones internacionales de las que forma parte el Uruguay). Se advierte enseguida que todo es tan deliberadamente vago que, si la dictadura lo decide, podría obtener la declaración de "estado peligroso" con relación a decenas de miles de ciudadanos. Seguramente no se propone hacerlo efectivamente, pero sí lo es aumentar hasta el delirio el clima de inseguridad que vive ya cada uruguayo. En adelante, no alcanzará con no cometer ninguna acción que pueda ser calificada como delito; también habrá que tener cuidado de no juntarse con determinadas personas, de no guardar ciertos libros o discos, de no discutir algunos temas, de ocultar, en fin, aun más que hasta ahora, la forma de pensar. Precauciones elementales para no facilitar la declaración de "estado peligroso" que, de todos modos, podrá sobrevenir por los antecedentes, es decir por cualquier hecho del pasado, de quien tome, en el futuro, las mayores precauciones.

El riesgo existe, entonces, para todos. Y es un riesgo nada despreciable, ya que puede significar la internación en un campo de trabajo hasta por seis años o, por ejemplo, la obligación de mudarse a una localidad de la frontera o de someterse a vigilancia policial permanente, personal o domiciliaria. Por otra parte, estas medidas pueden aplicarse también a una persona que acaba de cumplir su pena: el proyecto prevé expresamente que en el caso de las personas que han obtenido su libertad provisional, los años de confinamiento como "peligroso" no se descontarán de la pena definitiva. Por consiguiente, la solicitud de excarcelación provisional de un procesado se transforma ahora en una lotería y, como nunca puede saberse si en definitiva se fijará o no un saldo de pena respecto a la preventiva que se cumplió, habrá de correr el riesgo de pasar años de detención como "peligroso" mientras se termina de sustanciar el proceso, sabiendo que esos años no valdrán luego para el cumplimiento de la pena.

Es cierto que se prevé para el "peligroso" la posibilidad de salir del territorio del país. Pero en esta materia también hay un retroceso: lo que hasta ahora rige, por lo menos de acuerdo con la Constitución, es una opción del interesado, que la autoridad está obligada a aceptar; lo que el proyecto establece es la mera posibilidad de solicitar la salida a la autoidad, que puede o no concederla. Y, por si fuera poco, en el caso de que se otorgue la autorización, queda convertido en delito el regreso al país.

La intención de confundir a la opinión internacional es más evidente todavía al examinarse el aspecto procesal del proyecto. En efecto, se prevé la competencia del Poder Judicial --y no de la justicia militar-- a través de dos jueces --uno de instrucción y otro letrado-- cuyos cargos se crean especialmente para entender en estos casos. La intervención de la magistratura ordinaria, en estas circunstancias, sólo en apariencia constituye una garantía. En primer lugar, porque el Poder Judicial va no es, en el Uruguay de hoy, un poder independiente, sino un "poder" atemorizado y condicionado por la situación política de absoluta ilegalidad que vive el país y subordinado, por si fuera poco, al Poder Ejecutivo a través del recientemente creado Ministerio de Justicia. ¿Qué miembro de la Suprema Corte de Justicia ignora que ese órgano puede correr la misma suerte que el Parlamento o que Bordaberry si llega a discrepar en lo más mínimo con los criterios del Poder Ejecutivo? En segundo lugar, si las causas de supuesta "peligrosidad" quedan siempre libradas a la apreciación exclusiva de los dos nuevos jueces ¿puede suponerse que estos cargos serán ocupados por personas que no sean de confianza del régimen o que no se comprometan a endosar las afirmaciones de los Ministerios del Interior o de Defensa Nacional? Por último, corresponde señalar que el proyecto de ley estipula que las decisiones de estos magistrados son definitivas, de modo que la persona considerada "peligrosa" no tiene ninguna posibilidad de plantear recursos ante los Tribunales de Apelaciones ni ante la Suprema Corte. En este sentido, paradójicamente, la justicia civil se vuelve más arbitraria que la justicia militar, al reconocer por vez primera lo que hasta ahora no admitía el procedimiento judicial civil ni el militar: que una pena de hasta seis años de privación de libertad pueda imponerse sin la intervención, por lo menos, de un Tribunal de Apelaciones.

6. URUGUAYO MUERTO EN BOLIVIA. El Ministerio del Interior de Bolivia informó que Enrique Joaquín Lucas, alias "Guille", de nacionalidad uruguaya, murió a mediados de setiembre en Cochabamba, durante un enfrentamiento con efectivos del ejército boliviano. Algunos días antes de darse a conocer el comunicado oficial, la prensa había informado que el nombre del uruguayo muerto en Cochabamba era Alberto Viroso.

7. ACTO INSTITUCIONAL Nº5: LA DICTADURA
PRETENDE IMPEDIR LA ACTUACION DE LAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

El 20 de octubre, en acuerdo con los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, el Poder Ejecutivo aprobó el Acto Institucional Nº 5, que esta-

blece normas relativas a la actitud que se propone adoptar la dictadura ante los pronunciamientos que puedan emitir las organizaciones internacionales en relación con el respeto de los derechos humanos en el Uruguay.

La parte dispositiva del documento estipula textualmente:

Artículo 1º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección II de la Constitución de la República, el Estado reconoce los Derechos Humanos como expresión natural del hombre por principio, con independencia de toda situación jurídica y por encima de cualquier previsión de la norma escrita.

Por consiguiente, las reglas constitucionales y legales solamente pueden limitarse a determinar las jurisdicciones, procedimientos y oportunidad de ejercer los respectivos medios jurídicos tutelares.

Artículo 2º.- Los Derechos Individuales, consagrados en las distintas situaciones jurídicas en las que se encuentra el hombre, están igualmente protegidos por las normas correspondientes de acuerdo con las regulaciones que imponga el orden constitucional y legal para cada caso.

Artículo 3º.- Todo ciudadano tiene derecho a la seguridad interna, entendiéndose por tal, genéricamente, una tutela integral del Estado que le permita la vigencia de sus Derechos Humanos y el libre ejercicio de sus Derechos Individuales.

En consecuencia, la defensa de los Derechos Humanos e Individuales, que encaran al hombre como unidad, deben regularse en función de la seguridad interna, que lo encaran colectivamente dentro de una organización política y un orden social.

Artículo 4º.- El Estado admite y propiciará la tutela de los Derechos Humanos e Individuales por Organismos Internacionales, pero solamente la aprobará para el futuro en las siguientes condiciones:

a) Que ellas se aseguren por Tribunales Internacionales profesionales permanentes designados con la máxima garantía de imparcialidad.

b) Que solamente se admitan las denuncias por otros Estados signatarios de los tratados respectivos.

c) Que el Estado denunciante admita el diligenciamiento simultáneo de denuncias de igual índole hechas por el denunciado.

En ningún caso se dará curso en esos Tribunales a planteamientos hechos a título particular o por Organismos Privados Nacionales o Internacionales, cualquiera sea su categoría.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc."

En resumidas cuentas, los tres primeros artículos son declarativos y en el cuarto se ponen trabas al funcionamiento de los tribunales internacionales competentes en materia de derechos humanos que han sido establecidos en convenios y tratados que el Uruguay ha ratificado. La dictadura, consciente de que si cualquier tribunal internacional imparcial examinase la situación de los derechos humanos en el Uruguay produciría un juicio condenatorio, pretende impedir la actuación de todos ellos.

El apartado b) y la parte final del artículo 4 tienen claramente por objeto recusar la competencia del Comité de Derechos Humanos establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (resolución 2200 de la Asamblea General de las Naciones Unidas). Dicho Pacto entró en vigor en el mes de marzo último y no reserva privativamente a los Estados la facultad de presentar denuncias.

Pero más allá de las maniobras que intente la dictadura con el propósito de evitar las condenas de la comunidad internacional están las obligaciones ya contraídas por el Uruguay. Este "Acto Institucional" o cualquier otro --con cualquier nombre y con cualquier número-- que se apruebe, no liberará al actual régimen de las obligaciones previstas en los convenios y tratados ya firmados y ratificados por el país.

En este sentido, vale la pena preguntarse de dónde salen las facultades de la dictadura para la aprobación de los "Actos Institucionales" y, en particular, del No 5. La respuesta es una cita textual de este último documento: "El Poder Ejecutivo, en uso de las facultades que le confiere la institucionalización del proceso revolucionario y mientras no se formulen las normas constitucionales definitivas pertinentes, decreta: ...".

Y vale la pena, también, resumir, aunque sea brevemente, algunos de los nueve "considerandos" en que se funda el "Acto". Se dice, por ejemplo, "que el régimen de Actos Institucionales permite ir regulando los problemas en sus términos generales durante el período de transición en que nos encontramos"; "que la subversión y el terrorismo ... constituyen un agravio sistemático y sustancial a los derechos humanos e individuales y que la concepción tradicional en la materia únicamente preveía los instrumentos tutelares ante la acción del Estado como poder en condiciones de avasallarlos"; que "la actividad de aquellas fuerzas (la subversión y el terrorismo) ha modificado el planteamiento clásico, poniendo al Estado en la necesidad de establecer normas y procedimientos que protejan esos derechos fundamentales"; "que esas normas y procedimientos persiguen la seguridad interna..."; "que esa solución ... adquiere mayor importancia en estos momentos por obra de hombres, organizaciones internacionales y aun Estados que han desconocido y negado los derechos humanos más allá del límite tolerable por la cultura contemporánea, invirtiendo los términos de la cuestión y colocando como conculcadores de los mismos precisamente a los Estados que, como el nuestro, tratan de defender su seguridad contra quienes la desconocen y violan abierta y torpemente"; "que esta injusta situación solamente puede eliminarse o atenuarse moralizando los Organismos Internacionales".

8. EL PARLAMENTO EUROPEO CONDENA A LAS DICTADURAS DEL CONO SUR. El 15 de octubre, el Parlamento Europeo condenó, en Estrasburgo, las violaciones de los derechos humanos en

Chile, Argentina y Uruguay. La resolución, que fue presentada por los grupos demócrata cristianos y socialistas, recomienda la puesta en marcha de procedimientos --tanto a nivel diplomático como de las Naciones Unidas-- para la creación de comisiones de investigación internacionales en los países en los que se violan los derechos humanos.

9. PROMUEVEN INMIGRACION DE RHODESIANOS BLANCOS. Sendos editoriales, publicados con pocos días de diferencia por los diarios "El País", de Montevideo, y "ABC Color", de Asunción, proporcionan un nuevo síntoma de la progresiva identificación que, estimulada por el aislamiento internacional en que se sienten sumidos los regímenes de ambos "conos", se está registrando entre el sur de Africa y el de América Latina.

Ambos diarios proclaman el interés que sus respectivos países tendrían en promover la inmigración de los ciudadanos rhodesianos (blancos, desde luego) que abandonen el país cuando el poder sea transferido en Salisbury a la mayoría negra. El diario de Asunción es muy claro a este respecto, y partiendo de la base de que "Europa no tiene lugar para esa gente ni la querrá por razones ideológicas", sostiene que "entre los países en que podría darse la recepción rhodesiana, el nuestro surgiría como uno de los más indicados". A tal efecto, sugiere, "debería establecer los contactos necesarios a través de Estados Unidos o Sudáfrica".

10. LA PULGA EN LA OREJA. La suspensión de la ayuda militar norteamericana ha dado mucho que hablar a nivel de todos los sectores comprometidos con la dictadura. Lamentos y protestas, oficiales y officiosos, en diarios y en discursos, en el Uruguay y en el exterior, muestran hasta qué punto la condena del Congreso norteamericano se ha convertido en una pulga en la oreja de la dictadura. Se transcriben a continuación algunas de estas reacciones.

En el Consejo de Estado. Sr. Brun Cardozo: "Esto es parte de una maquinaria a nivel internacional que trata de ahogar al Uruguay". Sostuvo que el Congreso norteamericano no tiene autoridad moral para juzgar al Uruguay porque nunca habló de las atrocidades cometidas al lanzar las bombas en Hiroshima y Nagasaki ... y tampoco reaccionó como debía ante los asesinatos del presidente Kennedy y de Martin Luther King.

Sr. Osvaldo Soriano: "Aceptar la decisión implicaría reconocer que en ese país se han violado todos los derechos humanos y que, en ese aspecto, se ha igualado a Chile."

Sr. Viana Reyes: Calificó de "deplorable" la decisión norteamericana y señaló que había que tener en cuenta que "la política uruguaya siempre coincidió con la de los Estados Unidos".

Embajador Siracusa. "La embajada en Montevideo y el Departamento de Estado estaban en contra del retiro de la ayuda militar al Uruguay", se apresuró a declarar a "El País" el embajador norteamericano Ernest Siracusa al regresar a Montevideo el 18 de octubre, luego de una estadía de varias semanas en los Estados Unidos. Dijo además que se había entrevistado con el Senador Koch y con autoridades de Amnesty International para "darles un punto de vista diferente, prestarles asesoramiento con nuevos datos y plantearles una perspectiva mejor de la realidad del Uruguay hoy día". "Ambas entrevistas --prosiguió-- fueron satisfactorias, y nosotros seguiremos en la misma línea para tratar de solucionar la situación planteada." Siracusa desmintió las afirmaciones del Senador Edward Koch en el sentido de que la embajada en el Uruguay había ocultado o deformado información sobre la situación nacional, y finalizó comprometiéndose a mantener su objetivo de que se conozca "la realidad del Uruguay de hoy".

Canciller Blanco. En un pasaje del discurso pronunciado el 19 de octubre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Juan Carlos Blanco, afirmó: "No es admisible que un Estado o un órgano de un Estado, excediendo el campo de acción delimitado por el derecho internacional, pretenda asumir por sí y ante sí la función de enjuiciar a otros países o gobiernos, basado únicamente en su poder material. Es decir, asumir por sí y ante sí una supuesta rectoría de valores políticos y morales a escala universal, sin título internacional que la valide. Menos admisible, todavía, si cabe, es que tal actitud sirva para poner en juego criterios selectivos y discriminatorios de apreciación, eligiendo caprichosamente el blanco de sus ataques en función de simpatías políticas circunstanciales y sin atender para nada los reales niveles de vigencia global de los derechos humanos. Como es claro, me refiero a la medida contra mi país adoptada por el Congreso de los Estados Unidos esta semana. En este caso o en cualquier otro semejante, referido a mi país o a otros países, el Uruguay impugnará sistemáticamente decisiones como la anotada que, más allá de la indiscutible facultad interna de un órgano nacional de disponer a su arbitrio de fondos, significa, por su proyección internacional, una ofensa a la dignidad y una intromisión inaceptable que mi Gobierno rechaza con severidad y energía. Desde ya declaro, reiterando lo dicho en varias oportunidades, que estas acciones o cualesquiera otras, vengan de donde vinieren, no alterarán el camino trazado por mi país en pos de sus propios objetivos nacionales. Antes bien, serán motivo, como en el caso presente, de una mayor consolidación y unidad ante la intromisión."

Días después, en una entrevista de prensa celebrada en Nueva York, Blanco sostuvo que la tendencia del Congreso norteamericano a establecer un vínculo cada vez más estrecho entre la ayuda exterior de ese país y la política de sus potenciales beneficiarios en materia de derechos humanos, puede crear fricciones en el ámbito de las relaciones interamericanas. Anunció a continuación que la suspensión de la ayuda militar al Uruguay "va a provocar protestas en toda la región". Y añadió: "Lo he podido pulsar en conversaciones que hemos tenido aquí con los cancilleres de América", aclarando enseguida que esas conversaciones "no fueron provocadas por mí sino que surgieron espontáneamente".

Menos diplomático se mostró Blanco ante las cámaras del Canal 47 de televisión, de Nueva Jersey. En esa oportunidad, refiriéndose al Congreso norteamericano, sentenció: "No hay nada peor que la soberbia que emana de la ignorancia".

Revista "El Soldado". Según el diario argentino "La Opinión", el próximo número de la revista "El Soldado", publicada en el Uruguay por el Centro Militar, incluye un artículo sobre las relaciones de los países del Cono Sur con los Estados Unidos, en el que se señala "la necesidad de promover una fuerte unidad entre los países del sur del hemisferio". Concretamente, dice "El Soldado": "Más allá de los resultados de las elecciones norteamericanas, advertimos que lo principal será que la nueva administración de los Estados Unidos --nueva aún en el caso de reelección, pues es innegable que ésta daría a Ford un respaldo que jamás tuvo para llevar adelante sus ideas-- encuentre muy estrechamente unidos a los países latinoamericanos, reafirmados en asistirse mutuamente en la defensa de la integridad de los procesos de reconstrucción nacional que la mayoría de ellos hoy encaran y también confirmando las líneas económicas de progreso y desarrollo". Y concluye: "De esta manera, estimamos, se pondrá una barrera a los grupos de presión que quieren utilizar la influencia norteamericana contra los intereses legítimos de los pueblos del sur del continente, y se echarán las bases para una relación más fructífera y estrecha con la potencia del norte del hemisferio."

En otro párrafo, afirma la mencionada revista: "Para los países latinoamericanos, y en especial para los del Cono Sur, las elecciones norteamericanas pueden tener singular importancia. Por encima de quien resulte designado para la primera magistratura, se marcarán las tendencias del electorado norteamericano, y se verá entonces hasta qué punto están respaldados en la opinión norteamericana algunos actos de cierta hostilidad, aislados pero reales, que ha concretado el Congreso aprovechando una supremacía --que ahora llegaría a su fin-- sobre el poder central de la Unión."

Teniente General Vadora. Al inaugurar, el 12 de octubre, la llamada "Plaza del Ejército", en el Cerrito de la Victoria, el Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Julio César Vadora, rechazó los cargos del Congreso norteamericano en el sentido de que en el Uruguay no se respetan los derechos humanos. Sin mencionar plazos, dijo que "estamos en un período de transición en el cual se están arbitrando soluciones legales que permitan que el pueblo pueda ser dueño de su destino y artífice de sus aspiraciones". Refiriéndose a los presos políticos, afirmó Vadora: "Están albergados en establecimiento que son modelo, que cuestan al país miles de millones de pesos en su mantenimiento, pero que es un deber de humanidad que así lo hagamos". Y concluyó: "Nadie nos enseñará a respetar los derechos humanos del vencido".

Publicación de las actas del Congreso norteamericano. El 14 de octubre, las ediciones de los cuatro diarios que se publican actualmente en el Uruguay se agotaron rápidamente y cada ejemplar empezó a circular, en calidad de préstamo, de mano en mano. Motivo: la publicación de varios pasajes de los debates sobre el retiro de la ayuda militar, celebrados en diversos órganos del Congreso norteamericano.

Insólitamente, y por primera vez en muchos años, el lector uruguayo tuvo la ocasión de leer en medios de prensa autorizados por la dictadura conceptos reveladores de la imagen que ésta se ha ganado en el exterior. La publicación se realizó por orden del Poder Ejecutivo, y los motivos que tuvo para darla pueden desprenderse de la introducción que insertó "El País": "Estas versiones darán a nuestros lectores una nueva oportunidad para comprobar las agudas diferencias entre lo que han afirmado algunos congresales norteamericanos y lo que han vivido y viven hoy cada uno de los uruguayos. Por nuestra parte, comentaremos editorialmente estas versiones en las próximas ediciones."

Diario "El Mercurio" (Chile). "Los congresistas norteamericanos que promueven sanciones contra los países donde se violan los derechos humanos deberían preocuparse por las discriminaciones raciales y sociales en los Estados Unidos."

Diario "La Nación" (Argentina). "No es exagerado el duro concepto emitido días atrás por un diario de Montevideo al sostener que con la referida actitud el Congreso norteamericano está tomando, lisa y llanamente, el partido de la subversión internacional."

11. GIRA DIPLOMATICA, COMERCIAL Y FINANCIERA: Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, Dr. Juan Carlos

Blanco y Cdor. Valentín Arismendi respectivamente, encabezan la delegación que está recorriendo diversos países con el fin de consolidar e incrementar las relaciones internacionales del Uruguay, tanto en materia política como comercial.

La gira incluye los Estados Unidos (20 al 23 de octubre), Japón (24 al 30), Corea del Sur (30 de octubre al 30 de noviembre), Formosa (3 al 6 de noviembre), Hong-Kong (6 al 10 de noviembre), Ginebra, Zurich, Frankfurt y El Cairo (15 de noviembre). El regreso a Montevideo será el 21 de noviembre.

Además de los dos ministros, integran la delegación el Director de Comercio Exterior y el del Departamento de Asuntos Económicos y Comerciales de la Cancillería, Cdores. Santiago Acuña y Adolfo Donamarí respectivamente, el presidente del Banco República, Gral. Abdón Pavmúndez, y el presidente de la Cámara de Industrias, Sr. Edgardo Abellá. Un grupo de empresarios privados acompañará a la delegación durante varias de sus visitas.

"La misión se inscribe en el marco de la política de apertura instrumentada por el Gobierno para abordar con un mayor dinamismo la búsqueda de nuevos horizontes en distintas áreas", declaró a la prensa el Canciller Blanco. Dijo además que "de acuerdo con la filosofía del Gobierno, estas gestiones no tienen como objetivo cerrar negocios; el sector público crea la atmósfera, tiende los puentes y abre los caminos a través de los cuales actúe y circule con mayor fluidez la actividad privada". "Vamos a brindar información sobre nuestra realidad política y económica para que nos conozcan mejor --siguió diciendo Blanco--; siempre resulta muy útil intercambiar opiniones sobre la problemática internacional." Por otra parte, en San Francisco (California), la delegación aprovechará para realizar gestiones ante organismos de crédito internacionales.

Según la Dirección General de Comercio Exterior, de los países que visitará la misión, el Japón es el que mantiene con el Uruguay relaciones comerciales más intensas. De acuerdo con informaciones proporcionadas por el Banco República, en el primer semestre de este año, las exportaciones uruguayas --sobre todo cueros sin curtir, lana sucia y lavada, y piedras semi-preciosas en bruto-- sumaron 4 millones 209 mil dólares, mientras que las importaciones --una gran variedad de productos, casi todos manufacturados-- totalizaron 4 millones 407 mil dólares.

12. LIBERAN A GARGANO. El 20 de octubre, el gobierno brasileño expulsó de su territorio al dirigente del Partido Socialista uruguayo Reinaldo Gargano, que había sido detenido en el aeropuerto de San Pablo el 25 de setiembre (ver "Informaciones", Nº 57). Pudo confirmarse que dicha detención se había producido a solicitud de las autoridades uruguayas, que habían requerido a Gargano en 1973, al decretar la disolución de la CNT, por su condición de dirigente sindical. Gargano pudo seguir viaje con destino a París.

13. NUEVO SUBSECRETARIO DE CULTURA; El Dr. Héctor Mario Artu-
PROBLEMAS PARA INTEGRAR LA CORTE ELECTORAL. cio Irigoyen asumió el 20 de octubre el cargo de Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, a propuesta del titular de esa cartera, Dr. Daniel Darraco. La Subsecretaría estaba vacante desde la renuncia del Dr. Martín C. Martínez, quien pasó a integrar el Consejo de Estado.

En cambio, no se han podido proveer todavía las vacantes --producidas hace ya algunos meses-- en la Corte Electoral, a raíz de las renunciaciones de los ministros Saráchaga, Galo y Gurméndez. En efecto, los tres suplentes convocados hasta ahora no han aceptado integrar ese órgano: el Dr. Ponce de León, el Dr. Javier Barrios Anza y el Prof. Monteverdi. ¿Será porque la Corte Electoral, encargada de la organización de las elecciones, no parece tener demasiadas perspectivas de trabajo en el Uruguay de los militares?

14. 16^a DEVALUACION DE 1976. El Banco Central dispuso, el 8 de octubre, una nueva "minidevaluación" del peso uruguayo, del orden del 1,94 %, al fijar la cotización del dólar comercial en N\$ 3,68 en la compra y N\$ 3,72 en la venta. La 15^a devaluación de este año había sido consuetudinaria el 13 de setiembre y había fijado la cotización del dólar en N\$ 3,61 y N\$ 3,65 en la compra y en la venta respectivamente, lo que representó una pérdida de valor del 1,90 % del peso uruguayo.

15. SUPERAVIT DE LA BALANZA COMERCIAL. Según informaciones suministradas por el Banco Central, al 10 de setiembre de 1976, la balanza comercial uruguayana arrojaba un superávit de 12 millones 177 mil dólares, al haberse exportado por un monto de 376 millones 309 mil dólares e importado por 364 millones 132 mil dólares. De acuerdo con la misma fuente, un año atrás se registraba un déficit de 137 millones 415 mil dólares: las exportaciones sumaban 228 millones 131 mil dólares y las importaciones 365 millones 546 mil dólares.

16. EL COSENA Y LA CARNE. De acuerdo con un comunicado del COSENA, la producción uruguayana consume demasiada carne y el promedio actual, que es de 85 kilos por habitante y por año, debe reducirse en algo más de un 20 %, a fin de llegar a 67 kilos. Por su parte, el Ministro de Agricultura y Pesca, Ino. Julio Aznárez, se había registrado un considerable aumento, en los últimos años, en la producción, el consumo y la exportación de carne vacuna. Se transcriben a continuación las cifras dadas a conocer por Aznárez (en miles de toneladas).

Año	Producción	Consumo	Exportación
1971	242	154	88
1972	236	121	115
1973	260	150	110
1974	313	196	117
1975	328	216	112
1976	400	224	176

(estimado)

La difusión de estas cifras oficiales se debe, sin duda, a las informaciones periodísticas según las cuales, en las últimas semanas, se había notado una escasez para satisfacer la demanda del mercado interno.

17. COMBUSTIBLES: ENTRE UN 14% Y UN 21% DE AUMENTO. El 8 de octubre, el Poder Ejecutivo decretó un considerable aumento de los precios de los combustibles y lubricantes. El alza anterior se había producido apenas tres meses atrás (2 de julio). Se publica a continuación un cuadro que contiene los precios y porcentajes de aumento de los distintos productos.

Producto	Precio desde <u>2/julio/76</u>	Precio desde <u>8/octubre/76</u>	Aumento
Nafta supercarburante	1,82	2,07	13,74 %
Nafta común	1,44	1,64	13,89 %
Kerosene	0,63	0,76	20,63 %
Supergás	1,33	1,60	20,30 %
Aguarrás	1,26	1,51	19,84 %
Gas oil	0,60	0,72	20,00 %
in	3,85	4,69	21,82 %
Mu grado	5,35	6,47	20,93 %
Su diesel	4,39	5,33	21,41 %
Motorlub	4,12	5,01	21,60 %

18. BOLETO: EMPRESAS RECLAMAN 23,55 % DE AUMENTO. A raíz de la suba de los combustibles, el 18 de octubre las empresas de transporte colectivo de pasajeros de la capital solicitaron a la Intendencia de Montevideo autorización para fijar en N\$ 0,556 el precio del boleto. El reclamo, que supone un aumento del orden del 23,55 %, se encuentra a estudio de la comisión municipal correspondiente. Por su parte, los propietarios de taxis y las empresas de transporte interdepartamental anunciaron que también deberán fijarse nuevas tarifas para esos servicios a fin de absorber el alza de los combustibles. Si bien todavía no han dado a conocer los porcentajes de aumento que reclamarán, trascendió que los taxistas exigirán más del 14 por ciento.

19. SUBE EL AZUCAR: 19,7 %. El 5 de octubre, el Poder Ejecutivo fijó en N\$ 2,73 el precio de venta al público del kilo de azúcar. Este aumento es del 19,7 %.

20. AUMENTO DE SALARIOS: 6 %. El 7 de octubre, el COSENA aprobó un aumento salarial del 6 % para los trabajadores de la actividad privada y del 5 % vegetativo más el 1 % correctivo para los funcionarios públicos. La fórmula adoptada para el sector público significa el 5 % se aplica a la totalidad de los funcionarios, mientras que el del presupuesto total de sueldos de la administración pública se adjudicará como aumento a los funcionarios que, de acuerdo con las funciones que desempeñan y los horarios que cumplen, se encuentran comparativamente peor remunerados. Estos aumentos rigen a partir del 1º de octubre.

Si se tiene en cuenta que, según la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, el aumento del costo de vida --sólo durante el mes de setiembre-- fue del 4,53 %, así como los aumentos de distintos productos decretados en octubre --y en particular las alzas en cadena que sin duda producirá el incremento de los precios de los combustibles-- se puede valorar la incidencia en el salario real del aumento de sueldos resuelto por la dictadura.

Con dicho aumento, se fijó en N\$ 260,75 el salario mínimo nacional para los mayores de 18 años.

21. AUTORIDADES DE LA DICTADURA
CONSEJO DE ESTADO

A partir del 1º de setiembre, el Consejo de Estado, cuyos miembros son designados por el Consejo de la Nación, quedó inte-

grado de la siguiente manera:

- Titulares: Dr. Hamlet Reyes (presidente)
Dra. Aurora Alvarez de Silva Ledesma
(*) Prof. Blanca Amorós de León de Dutra
Dr. Mario Arcos Pérez
(*) Prof. José Carlos Brún Cardoso
(*) Dr. Marcial Bugallo
Ing. Mario Jorge Coppetti
(*) Ing. Eduardo Crispo Ayala
Dr. Julio César Espínola
(*) Dr. José E. Etcheverry Stirling
Dr. José Francisco Franca
Dr. Mario Gaggero
(*) Ing. Quím. Bertrand Gruss
Dr. Jorge E. Laborde Bercianos
Dr. Martín C. Martínez
Dr. Willy Patocchi
Ing. Eduardo Praderi
(*) Dr. Rafael Ravera Giuria
(*) Cdor. Pedro P. Rivero
Dr. Daniel Rodríguez Larreta
(*) Cdor. Alberto Rodríguez Margheri
(*) Ing. Agr. Jorge Seré del Campo
Dr. Osvaldo Soriano
(*) Ing. Alejandro Végh Villegas
Dr. Enrique Viana Reyes

Suplentes:

- (*) Prof. José Luis Vadora Rozier
(*) Edgardo Héctor Abellá
(*) Dr. Buenaventura Caviglia

Notas: El asterisco (*) precede a los nombres de los miembros del Consejo de Estado que se incorporaron a partir del 1º de setiembre; los restantes ya lo integraban antes de esa fecha y fueron confirmados por el Consejo de la Nación (compuesto por el propio Consejo de Estado y los 21 oficiales generales de las Fuerzas Armadas).

De conformidad con las Actas Institucionales, el Consejo de Estado se integra con 25 miembros titulares y 5 suplentes (que ingresan por orden preferencial en caso de ausencia de cualquiera de los titulares). Al proceder a la designación de suplentes, el Consejo de la Nación no llegó a un acuerdo sobre los distintos candidatos propuestos, por lo que decidió no proveer dos cargos de suplentes, que por ahora siguen acéfalos.